



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

27387/2023 GEOPARK ARGENTINA LIMITED SOCIEDAD EXTRANJERA c/  
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO  
EXTERNO

Buenos Aires, octubre de 2023.

VISTOS:

Estos autos caratulados: “Geopark Argentina Limited Sociedad Extranjera c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y

CONSIDERANDO:

1º) Que, a fs. 2310/2316vta., el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) confirmó parcialmente las resoluciones apeladas en cuanto a los cargos identificados como “B) y C) en el Impuesto al Valor Agregado y B) punto 1 en el Impuesto a las Ganancias” y las revocó en el aspecto restante, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el considerando VII; (ii) impuso las costas en proporción a sus respectivos vencimientos; y (iii) ordenó al Fisco Nacional que practicara la reliquidación pertinente.

Para así decidir, y en lo que aquí interesa, sostuvo que:

a) El ajuste fiscal versó sobre: (i) la presunta omisión de la actora de declarar rentas gravadas en el Impuesto a las Ganancias de los períodos 2007, 2008 y 2009 (“ajuste A”); (ii) el cómputo de gastos improcedentes en el ejercicio 2009 (“ajuste B”), integrados por gastos de representación (punto 1º), diferencias de cambio e intereses de préstamos (puntos 2º y 3º); (iii) la presunta omisión de débitos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (períodos 07/07, 09/07 a 01/08, 05/08, 07/08 a 09/08, 12/08, 01/09, 05/09, 06/09, 10/09 y 12/09) (“ajuste A”); (iv) el traslado improcedente de saldo a favor en el referido gravamen (períodos 01/07 a 12/09) (“ajuste B”); y (v) el cómputo indebido de crédito fiscal en las declaraciones juradas 01/09 a 12/09 (“ajuste C”);

b) Respecto del “ajuste A” del Impuesto a las Ganancias, la auditoría llevada adelante por la fiscalización verificó que la actora había recibido transferencias de dinero provenientes del exterior en concepto de aportes de capital y préstamos de Geopark Holdings Limited y de Geopark Argentina Limited, ambas con domicilio en Bermudas y cuya existencia fue confirmada por la Dirección de Fiscalidad Internacional del organismo recaudador. Puntualmente, consideró aplicable la presunción establecida en el artículo primero sin número agregado a continuación del artículo 18 de la ley

USO OFICIAL



11.683 (en adelante “artículo 18.1.”) en tanto los fondos provenían de sociedades radicadas en un país de baja o nula tributación y la actora “*no justificó con pruebas fehacientes que dichos fondos se hayan originado en actividades efectivamente realizadas por la contribuyente o por terceros en dichos país, o que provengan de colocaciones de fondos oportunamente declarados*” (fs. 2314);

c) El Fisco alegó que el “ajuste B”, punto 1º relativo al Impuesto a las Ganancias estaba motivado en la deducción en concepto de “*gastos de representación*” en exceso al importe admitido por el art. 87, inciso i, de la ley del gravamen (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones);

d) En lo que atañe al “ajuste B”, punto 2º, la fiscalización consideró improcedente el cómputo en concepto de diferencias de cambio respecto del pasivo vinculado con ingresos provenientes de Bermudas;

e) El “ajuste B”, punto 3º, refiere a impugnación de la deducción de intereses motivados en los préstamos a pagar a la casa matriz de la actora, esto es, Geopark Holding Limited;

f) La parte actora no había formulado agravio alguno con relación a los “*cargos B) y C) en el Impuesto al Valor Agregado y B) punto 1 en el Impuesto a las Ganancias*” (fs. 2315) por lo que correspondía confirmar el ajuste fiscal en ese aspecto;

g) Respecto a la aplicación de la presunción prevista en el artículo 18.1. de la ley de rito, destacó que en los años 2007, 2008 y 2009, la actora recibió distintas remisiones de fondos por parte de Geopark Holdings Limited radicada en Bermudas y alegó que aquéllos se habían originado en distintos procesos de colocación de acciones realizados en los años 2006, 2008 y 2009. Ello así consideró que se encontraba demostrada la secuencia completa de la operatoria en cuestión en lo que corresponde al origen de los fondos, “*circunstancia cuestionada por el Fisco Nacional*” (fs. 2315vta.);

h) El exhorto obrante a fs. 2172/2185 acredita que Oriel Securities Limited actuaba como agente y asesor designado para Geopark Holdings Limited para la colocación de nuevas acciones ordinarias en esa compañía en mayo de 2008, mayo de 2009 y noviembre de 2009;

i) La prueba informativa producida a fs. 2095/2105 demuestra que IFC-International Finance Corporation (en adelante, la “CFI”) suscribió acciones de Geopark Holdings Limited que fueron adquiridas y abonadas por medio de transferencias efectuadas al Bank of Bermuda Hamilton, hoy denominado HSBC Bank Bermuda Limited (cuentas nº 819956 y 010-091973-501), según el detalle allí indicado;

j) La información recabada a través de la prueba informativa es conteste con la “*Certificación sobre movimientos de fondos de cuentas corrientes bancarias de Geopark Holdings Limited y Geopark Argentina Limited - Sucursal Argentina entre el 1 de mayo de 2006 y el 31 de diciembre de 2009*”, adjunta como





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Anexo II de la prueba documental y cotejada con el extracto bancario de la cuenta corriente de Geopark Holdings Limited n° 010-091973-001 del banco “Bank of Bermuda (Member HSBC Group)”;

k) El informe pericial da cuenta del origen de los fondos con que se realizaron asignaciones de capital y préstamos a Geopark Argentina Limited, Sucursal Argentina, durante los años 2006, 2008 y 2009 y de las sumas ingresadas a Geopark Holdings Limited en concepto de colocación de acciones en el Mercado de Inversiones de la Bolsa de Londres, durante el período bajo análisis;

l) A partir del examen de los extractos bancarios y de la documentación descrita en el informe pericial, surgía que *“los fondos con que Geopark Holdings Limited realizó las remisiones de fondos a Geopark Argentina Limited, Sociedad Extranjera, durante el período 01/05/2006 a 31/12/2009, fueron originados en procesos de colocación de acciones en el Mercado Alternativo de la Bolsa de Londres, adquiridas por distintos inversores”* (fs. 2316);

m) Las respuestas del perito propuesto por la parte actora e incorporadas en el informe pericial se encuentran respaldadas por la prueba informativa producida que acredita el origen de los aporte y los préstamos impugnados; y

n) Geopark Holdings Limited contaba con fondos disponibles en el Banco de Bermudas para realizar las transferencias, habiendo justificado el origen con la existencia de cuatro colocaciones de acciones y sus resultados.

2º) Que, disconforme con el pronunciamiento, **la demandada** interpuso y fundó su recurso de apelación (conf. fs. 2336 y 2361/2368vta., respectivamente), que fue replicado a fs. 2413/2420vta.

Manifiesta que el único ajuste revocado por el Tribunal Fiscal fue el incremento patrimonial no justificado planteado para el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2007 a 2009 y para el Impuesto al Valor Agregado de las posiciones 1/07 a 12/09 *“sobre la base de los préstamos y aportes de capital provenientes de las firmas Geopark Holding Limited y Geopark Argentina LTD, ambas con domicilio en Bermudas”* (fs. 2362).

Precisa que la actora recibió distintas remisiones de fondos por parte de sociedades radicadas en una jurisdicción de baja o nula tributación que motivaron la aplicación de la presunción legal establecida en el artículo 18.1. de la ley 11.683, *“considerando que los monto recibidos provienen de ganancias gravadas en Impuesto a las Ganancias y Ventas omitidas en IVA”* (fs. 2364vta.).

Puntualiza que la mentada presunción admite prueba en contrario consistente en la demostración fehaciente de que los fondos remitidos se originaron en actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por terceros en dichos países

USO OFICIAL



o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados. Así pues, asevera que *“la ley es clara en este aspecto y limita la prueba, estableciendo con claridad que los fondos deben ser el resultado de actividades o colocaciones de fondos realizadas dentro del país de baja tributación desde el cual se giran los fondos y no de otros”* (fs. 2364vta., el destacado es original). En ese sentido, advierte que la actora sólo habría intentado demostrar que los fondos receptados serían el resultado de la suscripción de acciones realizada en el mercado de Londres, es decir, *“fuera del país de residencia de la empresa, resultando además que dicha operatoria no responde a actividades generadoras de ingresos sino a simples colocaciones financieras”* (fs. 2365, el destacado es original).

Pone de resalto que la obtención de fondos por parte de Geopark Holdings Limited a través de una supuesta suscripción o venta de acciones en Londres, no implica que el aporte de capital efectuado con posterioridad se corresponda con la operación financiera realizada en dicha ciudad.

Subraya que la acreditación de la existencia de un préstamo proveniente de un país con ventajas fiscales está sujeta a la demostración de *“la introducción de capitales al país, el origen de los fondos en el patrimonio o actividad de la sociedad prestamista y la oportunidad y condiciones del mutuo”* (fs. 2366). A ello cabe añadir que la participación de una sociedad vinculada en el negocio jurídico en cuestión exige *“acreditar en la sociedad extranjera cierta ‘consistencia’ (en lo temporal, y actividad propia de su objeto), esto es, que no se trata de una sociedad ficticia, un montaje jurídico artificial constituido y desarrollado sólo por motivaciones de fraude”* (fs. 2366).

Sostiene que la suscripción de acciones carece de la cualidades exigidas por la normativa aplicable para ser considerada una prueba válida a fin de rebatir la presunción prevista en el artículo 18.1 por cuanto: (i) *“no se trata de una actividad realizada por la empresa o terceros”*; y (ii) no comporta un hecho generado dentro del país de baja tributación desde el cual fueron remitidos los fondos a la República Argentina (fs. 2366). En esa misma línea, aduce que tampoco fue probada la existencia de colocaciones declaradas por la actora en Bermudas.

Desconoce la validez probatoria del informe pericial en tanto alega que: (i) la tarea fue realizada sobre fotocopias simples cuando debió utilizarse la documentación original que se encontraba en sede del Tribunal Fiscal y asevera que en nada modifica lo expuesto el hecho de que el perito propuesto por la actora haya concurrido a ese organismo para verificar la autenticidad de la documentación compulsada puesto que *“debió realizar dicha tarea en conjunto con el perito de esta parte y no en forma unilateral”* (fs. 2367); (ii) el perito designado por la AFIP expresó que los fondos aparecen disponibles a partir de contratos celebrados entre privados, sin fecha cierta y con apostillados *“a varios años posteriores”*, circunstancia omitida por su





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

colega en la respuesta al punto 1° del informe (fs. 2367); (iii) las repuestas de los puntos 2° y 3° no informan con claridad cuáles eran los saldos de las cuentas involucradas; y (iv) la apostilla no da por cierta la información contenida en dichos estados, *“al igual que la auditoría que da cuenta el colega, en la medida que no ha sido objeto de compulsas por parte de los suscriptos”* (fs. 2367vta.).

Esgrime que la prueba informativa no pudo corroborar que los fondos *“no provengan de sociedades asentadas en paraísos fiscales, como así tampoco el origen de los mismos ya que resulta imposible efectuar una relación directa entre los montos informados en los oficios y los cuestionados en las presentes actuaciones”* (fs. 2367vta.). En efecto, añade que el referido medio probatorio está constituido por documentos que justifican el movimiento de fondos pero no demuestran su verdadero origen ni satisfacen los requisitos contemplados por el artículo 18.1 de la ley 11.683.

En ese contexto, colige que *“la prueba producida, simplemente arroja, que se habrían colocado acciones en otro país y luego girado fondos, pero en modo alguno, cumple con los requisitos legales probatorios que establece la ley de rito”* (fs. 2368).

**3°) Que, la cuestión en debate** ante esta instancia se circunscribe a determinar si los aportes y préstamos cuestionados por el Fisco comportan incrementos patrimoniales no justificados en los términos del artículo 18.1. de la ley 11.683 y, por ende, si resultan susceptibles de ser calificados como ganancias netas a los fines del Impuesto a las Ganancias (resolución determinativa n° 332/15) y como ventas omitidas en el Impuesto al Valor Agregado (resolución determinativa n° 333/15) en los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

**4°) Que, conforme surge de las constancias de la causa,** y en función a los *agravios deducidos ante esta Alzada*, cabe poner de resalto que:

- En la resolución n° 332/15, el Fisco Nacional aseveró que: **(i)** *“una vez constatado que los fondos recibidos por la contribuyente partieron de un país de baja o nula tributación, resulta de aplicación la presunción contenida en el artículo 1° sin número agregado a continuación del artículo 18 de la Ley de Procedimiento Tributario, dejando librado a un paso posterior la justificación del origen de dichos fondos en el marco de las alternativas previstas por dicha norma”,* de lo contrario, *“se exigiría al Fisco la investigación previa del circuito de pagos y transacciones, tendientes a acreditar el origen de los fondos, cuestión ésta que fue precisamente la que la norma pretende evitar, poniendo dicha prueba en cabeza del contribuyente y no de este Organismo”* (fs. 14); **(ii)** la obtención de fondos por parte de Geopark Holdings Limited *“a través de una supuesta venta de acciones en Londres”* no implica que el

USO OFICIAL



aporte de capital efectuado en la sociedad actora provenga de dicha ciudad de modo que se encuentra cumplido el presupuesto legal para aplicar la presunción, esto es, “*que los fondos provengan de una país de baja o nula tributación*” (fs. 14); **(iii)** la prueba admitida por el legislador para derribar la presunción “*se encuentra restringida a los tres supuestos expresamente plasmados en el tercer párrafo del primer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 18 de la Ley Procedimental vigente*”, de lo contrario, el mentado legislador “*se habría referido genéricamente a la prueba en contrario*”, sin incorporar limitación alguna (fs. 14vta./15); **(iv)** el principio de realidad económica no puede conducir a desvirtuar lo específicamente regulado por las normas a fin de no afectar el principio de reserva o legalidad que rige en materia tributaria; **(v)** el supuesto de autos no se vincula con el artículo 18.2. de la ley de rito de modo que la actora no podría recurrir a “*otros mecanismos contemplados en esta ley*” para rebatir el ajuste practicado (fs. 15vta.); **(vi)** la presunción aplicada no requiere agotar el mecanismo de reconstrucción de la situación tributaria de los contribuyentes, “*sino que se aplica con la sola verificación de la naturaleza del país de origen de los fondos remesados*” (fs. 16); **(vii)** la actora intenta probar que “*el origen de los fondos proviene de una operatoria de emisión, colocación, y venta de acciones por parte de su controlante del exterior*” pero “*dicha operatoria no encuadra dentro de las previstas legalmente para desvirtuar la presunción aplicable. Ello sin perjuicio de lo expresado con relación a que no se encuentra debidamente acreditado en autos el origen genuino de los fondos receptados por la firma local*” (fs. 16/16vta.); **(viii)** la emisión, colocación y venta de acciones por parte de la sociedad controlante de la firma actora no encuadra en el concepto de “*actividad efectivamente realizada*” que exige la normativa involucrada “*toda vez que no se trataría del ejercicio de actos que tienen por fin inmediato el desarrollo del objeto social de la empresa, sino, el de captar recursos a los efectos de su consecución*” (fs. 16vta.); **(ix)** si la actora “*hubiera demostrado el origen de los fondos en concordancia con alguno de los tres supuestos previstos no se habría considerado la omisión de ganancia neta alguna*” (fs. 17); **(x)** la documental aportada en sede administrativa (Anexos I a XXVII) gira en torno a la explicación relativa al grupo económico Geopark, a la colocación de las acciones por parte de Geopark Holdings Limited y al préstamo obtenido por la actora: **(xi)** los Estados Financieros de Geopark Holdings Limited de los períodos 2006, 2008 y 2009 (Anexos I, III y IV) no acreditan la efectiva realización de actividades por parte de esa sociedad en Bermudas; **(xii)** el Anexo II refiere al régimen informativo de la IGJ respecto a las sociedades constituidas en el extranjero que no resulta conducente para rebatir el cargo formulado; **(xiii)** corresponde rechazar “*toda la prueba documental vinculada a la operatoria alegada por la rubrada que daría cuenta de una colocación de acciones en el mercado de valores de Londres, atento a que dicha documentación no encaja en los mentados tres supuestos de excepción*” (fs. 17vta.); **(xiv)** idéntica solución resulta aplicable a la prueba





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

informativa solicitada (puntos 1º a 5º) toda vez que se vincula con la emisión y colocación de las acciones; (xv) la actora no aportó constancias fehacientes que acrediten la concreción de la venta de acciones ni del “*circuito financiero completo*” para demostrar el origen de los fondos; y (xvi) la prueba informativa dirigida a las secretarías de energía (nacional y local) y a la IGJ resultaba inconducente, al igual que la pericial contable (fs. 6/19).

- La resolución n° 333/15 detalló los tres cargos en el Impuesto al Valor Agregado e indicó que el “ajuste A” (omisión de declarar débitos fiscales en los períodos 07/07, 09/07 a 1/08, 05/08, 07/08 a 09/08, 12/08, 01/09, 05/09, 06/09, 09/09, 10/09 y 12/09) se había originado en el incremento patrimonial no justificado en el Impuesto a las Ganancias. Al analizar las defensas expuestas en el descargo de la parte actora, la AFIP desarrolló argumentos análogos a los descriptos en el punto anterior (fs. 27/32). Por su parte, el Fisco puso de resalto que atento a la inscripción de la actora en una actividad alcanzada por el Impuesto al Valor Agregado, la fiscalización interviniente estableció los débitos fiscales omitidos. Por lo demás, confirmó los cargos B y C (traslado incorrecto de saldo técnico a favor y cómputo de crédito fiscal improcedente) por falta de agravio y efectuó idénticas consideraciones a las incorporadas en la resolución 332/15 respecto a los medios probatorios acompañados y ofrecidos por la contribuyente (fs. 20/36).

- En oportunidad de apelar ante el *a quo*, la parte actora estructuró su defensa en función a: (i) “*la correcta interpretación de la presunción*”; (ii) “*el origen de los fondos aportados por Geopark Holdings Limited*”; y (iii) el irrazonable resultado al que conduce la aplicación de la presunción en el *sub examine* (fs. 1441/1462vta.).

- Con respecto al primer agravio señalado, la contribuyente precisó que la presunción aquí involucrada fue incorporada para “*corregir los efectos de la doctrina de la Corte Suprema en el caso ‘Tebas’*” y coloca sobre los contribuyentes la carga de acreditar “*la justificación del origen de los fondos, es decir, que los mismos se generaron efectivamente en una fuente ubicada en extraña jurisdicción*” (fs. 1445/1445vta.). Asimismo, alegó que los mandamientos establecidos en el tercer párrafo del artículo 18.1. “*operan exclusivamente como valladar para la AFIP, no implicando de ningún modo una restricción al derecho del contribuyente a rebatir, mediante el aporte de prueba en contrario, los hechos legalmente inferidos*” (fs. 1446); conclusión ratificada por el artículo 18.2. de la ley de rito.

- A fin de acreditar el origen de los fondos y la inexistencia de producción o ventas no declaradas en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 dada la capacidad

USO OFICIAL



real de los pozos explotados por la Compañía, acompañó prueba documental (conf. fs. 2/1440vta. y 1463/2004) y ofreció prueba informativa, pericial contable y técnica.

- El Tribunal Fiscal abrió la causa a prueba y: **(i)** ordenó el libramiento de exhortos a Canaccord Adams Limited, a Stifel Financial Corp. (adquirente de Oriel Securities Limited) y a la CFI dirigidos a probar: (a) la participación de las dos primeras entidades en la colocación de acciones efectuada por Geopark Holdings Limited en los años 2006, 2008 y 2009 (conf. fs. 1459vta./1460); y (b) la suscripción de las acciones emitidas por la CFI (conf. fs. 1460vta. y fs. 2091, en cuanto sustituyó el exhorto por un oficio); **(ii)** rechazó la prueba informativa dirigida a las secretarías de energía (nacional y provincial), vinculada a volúmenes de producción, regalías y reservas de la actora en tanto “*las operaciones declaradas por la recurrente no se encuentran cuestionadas en autos*” (fs. 2050); **(iii)** no hizo lugar a la prueba pericial técnica geológica (dirigida a acreditar si la producción informada por la actora era técnicamente razonable) y a los puntos 1º a 6º de la prueba pericial contable I (relativos a las ventas de hidrocarburos durante el período 2006-2009 registradas en los libros contables de la contribuyente) (fs. 1461/1462), por inconducentes; y **(iv)** admitió la prueba pericial contable II destinada a acreditar el origen de los fondos con que Geopark Holdings Limited realizó asignaciones de capital y préstamos a la actora (fs. 1461vta. y 2073).

- La CFI confirmó la suscripción de acciones de Geopark Holdings Limited “*adquiridas y abonadas por medio de transferencias efectuadas al Bank of Bermuda Hamilton hoy denominado HSBC Bank Bermuda Limited*” (cuentas nº 819956 -año 2006- y 010091973501 -años 2008 y 2009-), según el detalle de precio y cantidad indicado a fs. 2104/2105.

- La pericial contable II indicó que, de acuerdo a los documentos listados en el punto I del informe (copias apostilladas obrantes en la presente causa) y las “*copias apostilladas de los extractos bancarios de la cuenta corriente de Geopark Holdings Limited, en el Banco of Bermuda (HSBC Group), N° 010-091973-001, desde el 01/05/2006 a 31/12/2009*” y “*de la cuenta de inversión en 'HSBC Corporate Money Funds Ltd – Class A Sweep' bajo el número de cliente B070041 a nombre de Geopark Holdings Limited del 01/05/2006 al 31/12/2009*”: **(i)** Geopark Holdings Limited colocó en la Bolsa de Londres 6.800.000 acciones en el año 2006 por USD 37.992.885,38, 3.080.000 en el año 2008 por USD 22.755.907,00 y 7.221.000 en el año 2009 por USD 31.998.738,95, que totalizan USD 92.747.531,33 (fs. 2150vta.); **(ii)** los fondos remitidos por Geopark Holdings Limited a la actora durante el período 1º/05/06 a 31/12/09, “*fueron originados en procesos de colocación de acciones en el Mercado Alternativo de la Bolsa de Londres*” (fs. 2150vta.). Por su parte, el perito propuesto por el Fisco advirtió que “*los fondos aparecen disponibles a partir de contratos realizados entre privados, que no poseen fecha cierta al tiempo de su concertación y apostillados a*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

USO OFICIAL

*varios años posteriores*” (fs. 2150vta.); y **(iii)** Geopark Holdings Limited operaba con dos cuentas, a saber, corriente y de inversión. La primera era utilizada como cuenta transaccional (desde la cual se emitían los pagos), y la segunda estaba destinada a la colocación de inversiones. Ello así, los expertos coligieron que *“la sociedad holding disponía de los fondos para concretar los giros objeto base de la determinación de oficio”* (fs. 2151vta.). Al respecto, el perito designado por la actora añadió que las transferencias receptadas por la sociedad argentina *“fueron solventadas con fondos provenientes de la cuenta de inversiones”* y precisó que entre el 1º/05/06 y el 31/12/09 *“ingresaron a la cuenta corriente de Geopark Holdings Limited en Banco Bermudas, por colocación de acciones, el equivalente a USD 92.747.531,33”* mientras que las transferencias a la actora, en ese mismo período, fueron por un total de USD 12.198.604,21, integrado por USD 6.000.000 en concepto de préstamo y USD 6.198.604,21 como aporte de capital (fs. 2153vta.) Por su parte, el informe detalló los principales inversores que suscribieron acciones en las colocaciones realizadas en los años 2006, 2008 y 2009 (fs. 2154) y los principales accionistas de Geopark Holdings Limited al 31/12/06, 31/12/07, 31/012/08 y 31/12/09 (fs. 2154/2154vta.), según información surgida de las notas de los Estados Contables de la compañía apostillados, auditados por PWC e incorporados en las presentes actuaciones (fs. 2155).

- Stifel Nicolaus Europe Limited (adquirente de Oriel Securities Limited) informó que Oriel *“actuaba como Agente y Asesor Designado para Geopark Holdings Limited en relación con las colocaciones de nuevas acciones ordinarias en la Compañía en mayo de 2008, mayo de 2009 y noviembre de 2009”* y precisó los resultados de las colocaciones, a saber: 3.080.000 acciones en mayo de 2008 por USD 24 millones (aprox.); 3.437.000 acciones en mayo de 2009 por USD 11,7 millones (aprox.); y 3.784.000 en noviembre de 2009 por USD 20,5 millones (aprox.) (conf. fs. 2172/2185vta.).

- A fs. 2186/2186 vta., la actora desistió del exhorto ordenado a Canaccord Adams Limited por cuanto la información que podría aportar con respecto a la colocación de acciones del año 2006 había sido incorporada como Anexo X del descargo presentado en sede administrativa.

**5º)** Que, en el escenario descripto, resulta conveniente diferenciar **dos órdenes de agravios** sometidos a consideración de este Tribunal, a saber: **a)** la falta de efectiva acreditación del *origen de los fondos* receptados por la actora en concepto de aportes de capital y préstamos; y **b)** el alcance del incumplimiento de los *requisitos contemplados en el tercer párrafo del artículo 18.1* de la ley 11.683 para tener por justificado el incremento patrimonial impugnado.



En lo que respecta a las quejas vinculadas al origen de los fondos, corresponde recordar que el artículo 86 de la ley 11.683, en lo que aquí interesa, dispone que en los recursos de revisión y apelación limitada contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal, la Cámara Federal “*resolverá el fondo del asunto, teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados. No obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos*”.

Así pues, la valoración del Tribunal Fiscal respecto a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho reservada a ese organismo que excede, en principio, el conocimiento de esta Cámara, a menos que se pruebe que el *a quo* hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión (conf. esta Sala, *in re* “Clement S.C.A.”, sent. del 10/11/98; entre muchas otras). De este modo, el carácter limitado del recurso bajo análisis en ningún modo implica que la revisión judicial no pueda valorar aquellos elementos de hecho y prueba, no sólo cuando se hayan omitido sustanciar y/o incorporar al proceso determinados hechos y/o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquellos [conf. doctrina de *Fallos*: 300:985, Sala V, *in re* “Aseguradora de Cauciones S.A. Cia de Seguros (T.F. 23.838-A) c/ DGA”, sent. del 4/08/10; “Astilleros Corrientes SAIC (TF 20010-A) c/ DGA y Otro”, sent. del 18/09/14].

Ahora bien, corresponde entonces analizar si las críticas formuladas por la AFIP a la valoración de las pruebas llevada a cabo por el *a quo* permiten tener por demostrada la arbitrariedad de la decisión apelada. A tal fin, es menester destacar que:

**a)** la elaboración del informe pericial sobre fotocopias de la documentación original obrante en la causa y a disposición de los expertos en el Tribunal Fiscal, no habilita a desatender las conclusiones del dictamen puesto que el perito de la AFIP siempre contó con la posibilidad de compulsar el expediente tal como lo hizo el perito de la parte actora (conf. fs. 2106, 2109, 2110/2134vta., 2135, 2144, 2145 y 2147). Máxime cuando la demandada no identifica diferencia y/o discrepancia alguna entre las copias utilizadas en la confección del informe y los originales.

**b)** la alegada falta de fecha cierta de contratos -que ni la demandada ni el experto por ella propuesto detallan y/o individualizan- no alcanza *per se* a rebatir la fuerza probatoria del informe pericial, su documentación respaldatoria (en especial la relativa a los movimientos y acreditaciones de las cuentas bancarias de los sujetos involucrados) y la prueba informativa producida respecto al proceso de colocación de acciones que, conjuntamente evaluadas, permiten tener por acreditada la disponibilidad y el origen de los fondos receptados por la actora.

**c)** en lo que atañe a la presunta falta de “*relación directa*” entre los montos informados en los oficios y los cuestionados en las presentes actuaciones, cabe





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

tener en cuenta que los importes detallados en la prueba informativa son coincidentes con las sumas validadas en el dictamen pericial y en la certificación contable (conf. fs. 38, 2172/2185vta. y fs. 2150vta.). Por otra parte, las cifras relevadas en las determinaciones de oficio e ingresadas al país bajo los códigos de operación n° 447 y 452 son aquellas incorporadas en la certificación contable de fs. 38/49 y derivan de las transferencias ejecutadas por Geopark Holdings Limited en USD que, convertidas al tipo de cambio entonces vigente, dan como resultados los montos considerados por la AFIP como incremento patrimonial no justificado (conf. fs. 8/8vta., 38/49; valoración efectuada por el *a quo* a fs. 2315vta. *in fine* y 2316). A ello corresponde añadir que los extractos bancarios acompañados como Anexo VI del recurso de apelación incoado ante el *a quo* consignan los importes obtenidos por la casa matriz en Bermudas por la colocación de acciones y las transferencias efectuadas a la actora (a modo de ejemplo, confrontar importes de fs. 41 con los extractos de fs. 986 y los montos de fs. 39/41 con los extractos de fs. 1306, 1307, 1308, 1520 y 1539 y respuesta del oficio obrante a fs. 2104/2105).

d) la demandada no cuestionó de manera concreta y circunstanciada las condiciones particulares del préstamo aquí comprometido sino que se limitó a replicar la doctrina jurisprudencial aplicada para verificar la real existencia de pasivos y *recién lo hizo en esta instancia* por lo que no resulta atendible [conf. fs. 6/19, 20/36 y 2365vta./2366; art. 277, CPCCN, art. 18 de la Constitución Nacional y criterio de esta Sala, *in re* “Pesquera Trans Antartic Ltda. (TF 49366-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/05/23, considerando 3°, *in fine*]. En efecto, en las resoluciones determinativas, la AFIP explicitó que “*si [la actora] hubiera demostrado el origen de los fondos en concordancia con alguno de los tres supuestos previstos, no se habría considerado la omisión de ganancia neta alguna*” (conf. fs. 17 y 32).

A partir de lo expuesto, es dable advertir que los agravios deducidos por la recurrente con relación a la valoración de la prueba efectuada por el *a quo* no alcanzan para tener por configurada la hipótesis de arbitrariedad exigida por el art. 86 de la ley 11.683 para desatender las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados, esto es que “*Geopark Holdings Limited contaba con fondos disponibles en el Banco de Bermudas para realizar las transferencias de autos habiendo justificado el origen con la existencia de cuatro colocaciones de acciones y sus resultados*” (fs. 2316).

6°) Que, resta examinar si la prueba del origen de los fondos en los términos *supra* detallados alcanza para desvirtuar la **presunción contenida en el art. 18.1. de la ley 11.683** según la cual “[c]uando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación —a que alude el artículo 15 de la Ley

USO OFICIAL



*de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones)— cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de que se trate, se considerará que tales fondos constituyen incrementos patrimoniales no justificados para el tomador o receptor local. Los incrementos patrimoniales no justificados a que se refiere el párrafo anterior con más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, representan ganancias netas del ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias y en su caso, base para estimar las operaciones gravadas omitidas del respectivo ejercicio comercial en los impuestos al valor agregado e internos. No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como justificados aquellos ingresos de fondos a cuyo respecto el interesado pruebe fehacientemente que se originaron en actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por terceros en dichos países o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados”.*

La presunción *supra* transcripta fue incorporada por art. 1º, punto V, de la ley 25.795 (B.O. 17/11/03) con “*la finalidad de otorgarle a la administración una herramienta efectiva para evitar las maniobras de evasión fiscal que se materializan a través de jurisdicciones de nula o baja tributación. En tal sentido, se dispone que el ingreso de fondos provenientes de las mismas, salvo prueba en contrario, se considerará incremento patrimonial no justificado*” (conf. mensaje de elevación nº 221 del Poder Ejecutivo Nacional, versión taquigráfica de la reunión 15º de la Cámara de Diputados de la Nación, p. 2605).

En el debate parlamentario, el Sr. Corfield manifestó que “[s]iempre hemos buscado el verdadero equilibrio para una sana relación entre el fisco y el contribuyente. Es por ello que para el presente proyecto hemos propuesto reformas, las que han sido receptadas por la AFIP y por la Comisión de Presupuesto y Hacienda (...) Las principales modificaciones que han sido receptadas abarcan los conceptos que enumeraré. En primer lugar, se han tratado de clarificar las facultades de la AFIP para considerar justificados los ingresos de fondos del exterior cuando el contribuyente pruebe fehacientemente su origen” (conf. versión taquigráfica de la reunión 15º de la Cámara de Diputados de la Nación, p. 2617).

Dicha observación se explica con la modificación propiciada al proyecto de ley original en cuanto, en su parte pertinente, establecía que “[n]o obstante lo dispuesto, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá considerar como justificados aquellos ingresos de fondos a cuyo respecto el interesado pruebe fehacientemente que se originaron en actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por terceros en dichos países o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados” (conf. versión taquigráfica de la reunión 15º de la Cámara de Diputados de la Nación, p. 2609) (el destacado es propio).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Por su parte, en la Cámara de Senadores de la Nación, el Sr. Capitanich precisó que el mecanismo establecido *“respecto de aquellos fondos del exterior tiene que ver con una interpretación, una corrección desde el punto de vista de la AFIP en virtud de un fallo de la Corte Suprema de Justicia -el caso Trebas-, que no identificó la presunción por parte de la AFIP como adecuada o correcta. En este sentido, con esta legislación vamos a admitir con precisión que aquellos ingresos que no hayan sido debidamente justificados, salvo admisión de prueba en contrario, inexorablemente se tomarán como incrementos patrimoniales no justificados”* (conf. versión taquigráfica de la reunión 27º de la Cámara de Senadores de la Nación, p. 180). En esa misma línea, el Sr. Baglini manifestó que *“acá hay un megaómnibus porque se están blanqueando legalmente presunciones ya usadas por la AFIP”* (conf. versión taquigráfica de la reunión 27º de la Cámara de Senadores de la Nación, p. 183).

A su turno, el senador Salvatori puso de resalto que *“los legisladores estamos dispuestos a dar una batalla frontal contra la evasión fiscal. Esto requiere de una legislación que permita al organismo recaudador exigir el pago a los contribuyentes y sancionar cuando no cumplan con sus obligaciones. Este proyecto crea presunciones que permiten revertir la carga de la prueba. Es decir, las determinaciones de oficio que la AFIP realice mediante los supuestos establecidos en esta ley se presumen correctos, pero tiene que dejar al contribuyente la posibilidad de probar en contrario”* (conf. versión taquigráfica de la reunión 27º de la Cámara de Senadores de la Nación, p. 187).

Así pues, cabe recordar que en el pronunciamiento “Trebas” (Fallos: 316:1979), la Corte Suprema indicó que, según la legislación entonces vigente, *“la circunstancia de que la sociedad inversora tuviera su domicilio en un `paraíso fiscal`, no autorizaba a exigir”* la prueba de que *“los fondos remesados desde el exterior no han sido producto de alguna actividad o capital gravado por la legislación argentina”*.

Ahora bien, una vez efectuada la modificación legal que incorporó la presunción establecida en el artículo 18.1., la doctrina ha interpretado que la prueba en contrario detallada en la norma resulta insuficiente por cuanto en algunos supuestos conllevaría a considerar como incrementos patrimoniales no justificados a fondos que no provienen de conducta evasiva alguna. Asimismo, se ha señalado que: (i) la prueba relativa a la actividad de terceros puede ser de dificultosa o imposible producción; y (ii) en términos generales, las entidades que se constituye en jurisdicciones de baja o nula tributación *“no pueden realizar actividades en las jurisdicciones del país de constitución”* (conf. Bertazza, Humberto J., *“Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada”*, La Ley, 2º edición, p. 283 y los artículos doctrinarios referenciados en las notas al pie nº 745 y 746).

USO OFICIAL



En el caso, los medios probatorios producidos por la actora acreditaron que el origen de los fondos comprometidos en los préstamos y en los aportes de capital fueron las colocaciones de acciones por parte de Geopark Holdings Limited efectuadas fuera de la jurisdicción de Bermudas. Así pues, el supuesto bajo análisis no resulta subsumible en ninguno de los tres escenarios mencionados por el tercer párrafo del artículo 18.1. *supra* transcripto. Sin embargo, lo cierto es que, frente a la inversión de la carga de la prueba que deriva del instituto en cuestión, la actora demostró que los fondos receptados **no** provienen de actividades o capitales gravados por la legislación argentina que pudieran haber generado utilidades no declaradas, hipótesis sobre la cual se asienta la presunción, tal como surge del debate parlamentario que tuvo lugar en oportunidad de incorporarla en la ley de rito. Dicha circunstancia sumada a la naturaleza *iuris tantum* de la mentada presunción y a la relevancia reconocida por los propios legisladores a los derechos del contribuyente frente a la herramienta de control otorgada a la AFIP, conllevan a considerar que los fondos aquí involucrados se encuentran *debidamente* justificados y alcanzan para rebatir el ajuste fiscal en los términos en que fue propuesto es esta causa.

En nada modifica lo expuesto la alegada “*interpretación literal*” a la que refiere la demandada puesto que una lectura apegada a la letra de la norma permite colegir que los tres escenarios allí descriptos resultan taxativos en cuanto a su carácter vinculante y mandatorio para el Fisco Nacional ya que la configuración de cualquiera de ellos *obliga* al organismo recaudador a considerar que el incremento patrimonial está justificado. No obstante, aquella directriz no puede ser entendida como una restricción al derecho de probar en contrario con que cuenta el contribuyente incidido y a la correlativa potestad de la Administración de valorar las pruebas que se acompañen para justificar el incremento patrimonial detectado; interpretación que no solo se corresponde con los términos empleados por la previsión examinada sino que -además- resulta compatible con las *motivaciones y la finalidad* explicitadas por el legislador al sancionar la ley 25.795, la clase de presunción incorporada, las garantías constitucionales de los contribuyentes y el principio de razonabilidad consagrado en la Carta Magna.

A mayor abundamiento, cabe recordar que la Corte Suprema ha declarado la legitimidad de la decisión administrativa para recurrir al método de la estimación de oficio y también ha sostenido que aquello no obsta al ejercicio del derecho del contribuyente de probar fehacientemente en juicio los errores que atribuye a la liquidación practicada por el Fisco (*Fallos*: 197:210; 205:31; 210:107; entre otros).

Por las razones apuntadas, **SE RESUELVE**: **a)** rechazar el recurso incoado por la demandada y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravio, con costas a la vencida (art. 68, primera parte, CPCCN); y **b)** oficiar al Representante del Fisco mediante Deox a fin de que se expida respecto a la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuado por la demandada (conf.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

providencias del 5/07/23 y 1º/08/23), por considerar que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10, *in fine*, de la acordada CSJN 90/92.

El Dr. Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).

Regístrese, notifíquese y ofíciase al Representante del Fisco mediante Deox.

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

USO OFICIAL

